

Innovación y formación judicial

Marvin Carvajal Pérez¹

Justicia y legitimidad

La legitimidad del Estado, así como de las instituciones públicas que lo conforman, constituye un tema permanente de atención por parte de las propias agencias oficiales, así como de quienes estudian los fenómenos sociales desde el punto de vista jurídico, sociológico o político.

La pérdida de legitimidad de una institución puede llevar a su decadencia e, incluso, a su desaparición. Si nos encontramos ante un instituto de corte autoritario o que de alguna forma desfavorece la seguridad y bienestar de los y las habitantes, esa exclusión será beneficiosa, pues abrirá la posibilidad de evolucionar hacia modelos asociativos más inclusivos y comprometidos con las personas. En cambio, si la organización en cuestión es esencial para la vida democrática, está destinada a proteger a la persona frente a la arbitrariedad y a impedir el uso de la violencia social. Entonces su supresión importará el riesgo de que sea sustituida por alternativas menos afines al sistema político republicano y moderado.

Tal es el caso de la justicia, función creada para asegurar a las personas el disfrute de todos sus derechos fundamentales, la defensa de sus intereses frente al Estado y frente a otras personas. En un Estado de derecho, la función jurisdiccional atenúa la arbitrariedad de quienes detentan el poder, coadyuva en forma relevante a la armoniosa convivencia social y evita que se utilicen medios violentos de solución de los conflictos interpersonales.

La pérdida de legitimación de la justicia acarrea riesgos de gran envergadura. Fomenta el empleo de medios poco adecuados de solución de controversias, incrementa el poder político real de las agencias públicas y de las grandes corporaciones privadas y afecta el clima de seguridad y estabilidad. En fin, abre paso a la configuración de un orden social autoritario, excluyente e inseguro. Desaparece la más importante garantía creada para la defensa de la dignidad e integridad de la persona humana: el proceso jurisdiccional, tal y como hoy lo conocemos.

Crisis de legitimidad

Las sociedades actuales enfrentan una aguda crisis de legitimidad en la Administración de Justicia. Este fenómeno es común en diversos Estados, caracterizados por diferentes niveles

¹ Director de la Escuela Judicial Licenciado Édgar Cervantes Villalta de Costa Rica

de riqueza y desarrollo humano, distintos grados de institucionalidad, diferentes modelos de construcción y aplicación del derecho, entre otros.

Las personas se cuestionan cada vez más el papel de la justicia y su utilidad como herramientas para su protección y la de sus derechos e intereses. Esta visión crítica de la justicia no es un mal en sí misma; puede incluso reflejar un determinado grado de madurez política en las sociedades. No obstante, las consecuencias de no actuar frente a tales demandas ciudadanas pueden ser devastadoras para el Estado democrático de derecho.

Las posibles causas de este fenómeno son varias. Por un lado, el Estado como tal y sus instituciones han perdido mucho de su prestigio. Los parlamentos, los gobiernos centrales y locales, entre otros, han sido fuertemente afectados en su legitimidad por diversas razones. La falta de eficacia, la burocratización excesiva de los procesos, los casos de corrupción en todos los niveles jerárquicos, partidos políticos meramente fisiológicos y unidos a grupos privados de presión, la desatención de las demandas de las personas y la falta de transparencia son algunos de los factores que han incidido para que el cuerpo social haya perdido mucha de su fe en las instituciones democráticas.

Lo anterior ha incluso favorecido el resurgimiento de gobiernos fuertes en diversas regiones, normalmente ubicados en los extremos del pensamiento político y con un interés cada vez menor en garantizar en forma plena el disfrute de los derechos fundamentales de las personas.

En el campo de la justicia, las personas reclaman por la existencia de servicios lentos y deficientes, de órganos jurisdiccionales mal organizados, de jueces y juezas con una deficiente preparación y divorciados de la realidad nacional. En buena medida, las personas estiman que la justicia no atiende sus necesidades o que al menos lo hace de forma muy deficiente.

Si bien en toda sociedad pueden existir grupos o personas interesados en deteriorar la imagen de la justicia, coyuntural o estructuralmente, lo cierto es que la situación actual de desprestigio de la justicia obliga al órgano a hacer un detenido y honesto autoexamen, de modo que sea posible determinar en cuáles aspectos los clamores populares encierran una realidad de falta de efectividad, de probidad o de pertinencia de los servicios que la Administración de Justicia presta.

“Autismo” judicial frente a la crisis

Muy al contrario de lo que se acaba de proponer, la reacción normal de los órganos jurisdiccionales frente a la pérdida de legitimidad sufrida ha sido el encierro en sí mismos, el establecimiento de una “barrera protectora” que evite el contacto con los reclamos y las reivindicaciones populares. Es lo que en algunos medios se ha denominado el “autismo” de

la justicia, una brecha artificial que separa a la justicia de los ciudadanos y las ciudadanas, la cual impide crear ambientes adecuados de transparencia y control.

Con frecuencia, los jueces y las juezas (en todos sus niveles, incluidas las Cortes Supremas) han apostado por la artificiosa y arrogante presunción de que la “sentencia se defiende por sí misma”, eludiendo así el deber del Estado, en cualquiera de sus agencias, de responder ante el soberano (el pueblo) acerca de la gestión que este le ha encomendado realizar.

De mantenerse esta situación, la justicia pierde una valiosa oportunidad de renovarse y mejorar, al tiempo que condena a las personas a tener que admitir (o soportar) que los servicios públicos que reciben en este campo son deficitarios y no llenan las expectativas del cuerpo social.

Respuesta a la crisis. Formación judicial

La atención de los problemas que en una sociedad generan esta crisis de legitimidad en la justicia implica una amplia variedad de acciones. La simplificación en los procesos jurisdiccionales, el mejoramiento de las estrategias idóneas de administración, los sistemas de gestión de calidad, el perfeccionamiento de los modelos de selección y el ascenso de los jueces y las juezas, el establecimiento de formas adecuadas de evaluación del desempeño, el uso máximo de las tecnologías de la información y comunicación, entre otros, pueden generar cambios de gran relevancia en la calidad del servicio que se presta, lo que en principio debería repercutir en mejoras en la percepción ciudadana y el consecuente incremento de la legitimidad.

En adición a las estrategias mencionadas, existe otro grupo de ellas con potencial de generar un impacto significativo y duradero en la calidad del servicio, así como en la legitimidad del sistema. Se trata del campo de la formación y capacitación judiciales que debe evolucionar —de una vez por todas— de los tradicionales métodos academicistas hacia vías adecuadas y sostenibles para el desarrollo e incremento de las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de la judicatura.

La acción de las Escuelas Judiciales en este campo consiste en generar procesos de formación y capacitación capaces de desarrollar (o mejorar) las aptitudes de los individuos que conforman el colegio, en aquellos campos considerados prioritarios para el ejercicio adecuado, eficaz y democrático de la función jurisdiccional. La formación debe estar destinada a lograr que la persona mejore sustancialmente sus conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes frente a la alta función que desempeña o desempeñará.

Si en una sociedad existe un déficit en la formación jurídica universitaria, la Escuela Judicial no es el órgano llamado a suplir tales deficiencias. Los procesos de selección deberían discriminar adecuadamente en tales aspectos. Lo que la formación judicial debe propiciar es que las personas mejoren en aquellos aspectos que directamente atañen a su función.

Se requieren mejoras relacionadas con la capacidad para dictar resoluciones de calidad y en plazos oportunos, para gestionar adecuadamente sus despachos, para lograr que la atención que las personas usuarias reciben sea humana y justa, con el fin de que los valores éticos que inspiran a la corporación se vean reflejados en todas y cada una de sus actuaciones.

Conciencia del papel político de la justicia

La justicia no es una función neutra, encargada simplemente de hacer cumplir ciegamente el mandato del legislador. Muy al contrario, se trata de una actividad creadora del derecho, transformadora de la realidad jurídica y con alta incidencia en las esferas social, económica y política.

Desde esa perspectiva, la formación judicial, tanto la de ingreso como la continuada, debe partir de dicha realidad y considerarla en sus planes de estudio, metodologías didácticas y estrategias de aprendizaje.

El juez y la jueza deben comprender con claridad que la acción de la justicia tiene una incidencia directa en la realidad del Estado, de la comunidad, de la familia. Las decisiones jurisdiccionales juegan un papel protagónico en la conformación de la realidad social, de la cual se nutren. Se les debe formar, por ende, potenciando el conocimiento real de los alcances de su función, así como entrenando técnicas para la previsión estratégica.

En su formación, las y los aspirantes a la Judicatura deben ser sometidos a situaciones de estrés controlado, las cuales les permitan desarrollar las competencias necesarias para actuar en forma eficaz en sus nuevos papeles de jueza y juez transformadores de la realidad, de jueza y de juez defensores del Estado de derecho y garantes de la seguridad y la libertad de todas las personas.

Transparencia en la actuación jurisdiccional

La legitimidad de la justicia pasa, en buena medida, por su transparencia y apertura al escrutinio ciudadano. Además de las medidas que los órganos jerárquicos deben adoptar para difundir al máximo los procedimientos y resultados de la actuación de la Judicatura, ahora fuertemente respaldados por los medios tecnológicos a su alcance, las Escuelas Judiciales deben trabajar intensamente para desarrollar y consolidar, en las juezas, los jueces y las personas aspirantes a la Carrera Judicial, un estilo de trabajo plenamente acorde con la apertura y la rendición de cuentas.

Desde la formación inicial, las personas deben ser concienciadas acerca de su deber como detentadoras de una potestad delegada por el pueblo soberano, para dar razón de sus actuaciones y mantener una sana y constructiva comunicación con las personas usuarias de sus servicios, los medios de comunicación y la sociedad civil.

La sentencia no se debe defender por sí misma. La persona juzgadora debe estar en la capacidad de discernir adecuadamente acerca de los alcances de este deber de comunicación y transparencia. En su formación, especialmente en aquella de ingreso a la Judicatura, se debe motivar fuertemente al y a la aspirante para permitir un amplio acceso ciudadano a sus decisiones y actuaciones. Asimismo, se les debe preparar para la comunicación efectiva y asertiva con las personas usuarias del sistema, con los demás órganos del Estado y con los medios periodísticos.

El Poder Judicial no puede evitar que la prensa difunda una noticia acerca de un grave error jurisdiccional. Es evidente que lo primero que debe hacer es evitar que se cometa ese tipo de errores en perjuicio de la justicia. No es menos importante que la institución se asegure de que la información a la que los medios masivos tendrán acceso sea veraz, exacta, y de que la corporación, a través de sus principales agentes (los jueces y las juezas) pueda dar las explicaciones requeridas para solventar malos entendidos y demostrar la validez de sus actuaciones o bien reconocer sus errores e informar acerca de las medidas adoptadas para solventar los problemas detectados.

Formación para la mejora del servicio público

El tercer elemento que se desea resaltar es el que atañe a la noción de justicia como un servicio público y no como un poder del Estado, visión tradicional heredada de la Revolución Francesa y de gran utilidad para asegurar independencia y majestad al Poder Judicial; pero que ha generado la idea de una función que está por encima de sus usuarios y usuarias y no de una actividad que por entero se debe a estos y estas.

En una visión de justicia como servicio público, es claro que la figura principal, la razón de ser de dicha función, es la persona usuaria de sus servicios. Aspectos tales como la organización del despacho, la disposición de la infraestructura e, incluso, la forma como se resuelve varían fuertemente si se considera a las personas como centro de la actividad jurisdiccional.

En sus procesos de formación, las Escuelas Judiciales deben propiciar estrategias de enseñanza/ aprendizaje que creen en los jueces y las juezas una convicción clara (incluso desde el punto de vista ideológico) acerca de la necesidad de tener siempre a la persona como centro y base del servicio jurisdiccional. Se debe acentuar la adquisición de conocimientos acerca de las necesidades especiales de ciertos grupos (personas portadoras de discapacidad, menores, etc.), así como el desarrollo de habilidades destinadas a garantizar a las personas un trato humano, eficiente y horizontal. Finalmente, se deben potenciar las actitudes y valores tendientes a generar una justicia democrática e inclusiva.

Para el logro de estos objetivos, las estrategias pedagógicas deben enfrentar a las personas aspirantes con una variedad de necesidades e intereses de diferentes personas o grupos, así como establecer formas de encontrar soluciones adecuadas a estas, en un marco de

respeto. El uso de recursos audiovisuales es altamente recomendado, pues permite recrear situaciones similares a las que la persona puede enfrentar en el desempeño diario de su función, y que importan la toma de decisiones a favor de una justicia horizontal, accesible e inclusiva.

La relación de este acápite con el de la ética en el ejercicio de la función jurisdiccional es innegable. La preparación del juez y la jueza para el enfrentamiento a diversos dilemas éticos incide directamente en otro aspecto de su legitimidad, como es la probidad, el cual deriva en una forma más de respeto a la dignidad de las personas que intervienen en el proceso jurisdiccional.

Papel de la ética en la formación judicial

La formación de quienes aspiran a la Judicatura y de quienes pertenecen a ella debe estar dirigida a desarrollar actitudes y valores coincidentes con los basamentos axiológicos de una justicia proba y comprometida con la persona. Si bien el campo de la ética es el de la libertad de decidir y actuar con base en dicha decisión, no cabe duda de que la convivencia humana genera determinados valores comunes que, en el campo de la actuación jurisdiccional, se reflejan en convicciones compartidas, cuya atención es esencial por parte de todo juez y toda jueza.

La simple impartición de cursos específicos en los Poderes Judiciales relativos a temas éticos ha demostrado una efectividad muy limitada. En cambio, la transversalización de los componentes axiológicos en todos los procesos de formación y capacitación tiene un alto potencial transformador de la conducta de las personas y, lo que es más importante, de la forma de pensar de estas frente al dilema ético.

Los objetivos pedagógicos y las estrategias metodológicas deben estar vinculados directamente al reforzamiento de una cultura apegada a los valores institucionales, nacionales y universales. Se busca que el Poder Judicial lleve a cabo una gestión ética de su elevada función, caracterizada por la asunción de responsabilidades en cada uno de los componentes de la organización, con respecto a sus deberes éticos para con el grupo y, más especialmente, con la sociedad.

Para el adecuado desarrollo de estas consecuencias, se recomienda el uso del método de casos, así como del enfoque constructivista, tendientes a lograr un auto empoderamiento por parte de la persona discente. También los ejercicios colaborativos, así como el uso de simulaciones en formato audiovisual resultan de gran utilidad, los cuales, enfrentan a la persona a diversas situaciones límite y le permitan decidir libremente acerca de las más acordes con el fundamento axiológico institucional.

Formación por competencias

Las múltiples transformaciones que han tenido lugar en el mundo a lo largo de las últimas décadas han provocado cambios fundamentales en las condiciones de vida de las sociedades. Las modificaciones en la esfera de la producción, el desarrollo científico y tecnológico, la globalización y el valor del conocimiento expresan procesos sumamente complejos que generan tendencias diversas. La educación y la capacitación profesional no han sido la excepción, ya que también están experimentando cambios importantes.

Entre los factores que han producido este ambiente de cambio, se incluyen la toma de conciencia de los retos que implica una economía globalizada y la competencia internacional. Entre los requisitos para lograr una economía que responda a las exigencias mundiales, se incluye una fuerza laboral calificada y flexible que se caracteriza por una gran productividad y por la capacidad de satisfacer las necesidades de un mercado en proceso de cambio.

De este modo, se presenta la necesidad de “relacionar de una manera más efectiva la educación con el mundo del trabajo, lo que conduce al sector oficial a promover la implementación de las opciones educativas basadas en los denominados modelos por competencias”, por lo que se plantea como de mayor relevancia poseer competencias para la solución de problemas específicos que tener una preparación en lo abstracto, sin la posibilidad de contar con expectativas para solucionarlos.

Existen diferentes aproximaciones conceptuales respecto al tema de las competencias. Un concepto generalmente aceptado la define como una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad plenamente identificada, y debe tener claro que la competencia no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo, sino que es una capacidad real y demostrada en la ejecución de ese trabajo. La competencia profesional permite a la persona funcionaria del Poder Judicial enfrentar diversas situaciones propias de su campo laboral y lograr un desempeño idóneo. Para lo cual, es clave que pueda coordinar las habilidades y destrezas buscando recombinarlas, así como las actitudes y conocimientos previos, los cuales la llevan a desaprender para reaprender y, de esta forma, tratar con situaciones nuevas.

Este enfoque de competencias profesionales en el ámbito educativo se presenta con el propósito de optimizar la preparación profesional en distintas disciplinas, para que la incorporación al ambiente laboral sea consecuente con las necesidades que se presentan. Estas se detectan mediante estudios e investigaciones, considerando así que la competencia se refiere a las funciones, tareas y roles de un o una profesional, las cuales le permiten desarrollar de forma idónea su puesto de trabajo y son resultado y objeto de un proceso de capacitación y cualificación que señala que la persona “es capaz de” o “está capacitada para”.

De las capacidades disponibles de la persona, sean cognitivas, procedimentales o actitudinales, en una acción combinada de ellas, puede obtener, gracias a la flexibilidad y adaptabilidad, la solución o respuesta apropiada para la situación a la que se enfrenta, lo que conduce a la noción de competencia relacional que reúne factores de las habilidades de las personas y las tareas que tienen en determinadas situaciones. Estos aspectos conforman el enfoque holístico, por cuanto integran y relacionan atributos y tareas, lo que permite que ocurran varias acciones simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo donde ocurre la acción, así como los valores y actitudes de quien actúa, relacionando el accionar con el desempeño real.

El análisis funcional es la base para la elaboración de las normas de competencia. “Una norma de competencia es una expectativa de desempeño en el lugar de trabajo, contra la cual es posible comparar un comportamiento observado”. De esta forma, se puede afirmar que la norma es un modelo que permite establecer si un o una profesional es competente o no, constituye un lenguaje común para vincular la capacitación y el perfil que se tiene como objetivo, y permite además la integración de las diversas formas de aprendizaje. Se trata de un sistema objetivo, independiente y universalmente aplicable, ya que provee un estándar uniforme que permite evaluar las competencias obtenidas por las personas.

De esta manera, la integración de una norma de competencia en sus diferentes componentes –las unidades de competencia, los elementos, las evidencias de desempeño, los criterios de desempeño, el campo de aplicación, las evidencias de conocimiento y las guías para la evaluación– es, a su vez, la base para la elaboración de los currículos de formación basados en competencias, donde los componentes son los elementos que constituyen y dan expresión a la competencia, y se precisan en términos de la calidad con que deben lograrse, las evidencias de que fueron obtenidos, el campo de aplicación y los conocimientos requeridos.

Se trata, por tanto, de tres grandes dominios a demostrar:

1. Dominio cognoscitivo que se refiere al aprender a conocer, aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento.
2. Dominio procedimental que se dirige hacia el aprender a hacer a fin de adquirir no solo una calificación profesional, sino también, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y trabajar en equipo aplicando los conocimientos.
3. Dominio actitudinal referido al aprender a convivir, a ser, desarrollando la comprensión hacia la otra persona y la percepción de las formas de interdependencia donde se respetan los valores de pluralismo, la comprensión mutua y la paz.

Al lado de estos dominios, se encuentran el ámbito de desempeño así como los criterios de desempeño, aspectos que conforman igualmente los componentes de las competencias y se refieren a la actuación de la persona dentro de un puesto laboral determinado.

Formación por competencias en la Escuela Judicial de Costa Rica

La Escuela Judicial Licenciado Édgar Cervantes Villalta es la institución encargada, en Costa Rica, de la formación y capacitación de quienes ejercen la función jurisdiccional. Desde hace más de tres décadas, dirige los procesos académicos tendientes a mejorar la calidad de la justicia en Costa Rica, además lidera diversos procesos regionales en el ámbito centroamericano e iberoamericano en el campo de la formación judicial.

Desde hace algunos años, la Escuela Judicial ha adoptado el enfoque por competencias como base esencial de su metodología de enseñanza. Para ello, ha puesto en práctica diversas estrategias tendientes a asegurar el paso hacia este nuevo paradigma formativo, entre ellas las que se mencionan a continuación.

A) Selección y formación del cuerpo docente

Para lograr un giro copernicano como el que se pretende en el funcionamiento de la justicia, es necesario contar con facilitadoras y facilitadores capaces de llevar adelante un proyecto formativo no tradicional. Para ello, se ha optado por seleccionar un cuerpo docente a partir del cumplimiento de un determinado perfil. Quien enseñe en la Escuela Judicial a los jueces y las juezas a actuar en forma eficiente y proba debe haber demostrado tales cualidades en la diaria función. Debe contar con habilidades para la docencia de personas adultas, en especial para el desarrollo de metodologías innovadoras de poco uso en los centros universitarios, donde probablemente radica su mayor experiencia en el campo de la enseñanza.

Una vez seleccionadas las personas que conformarán su nómina docente, la Escuela Judicial se encarga de capacitarlas en cuatro aspectos esenciales: formación por competencias, ética y valores, igualdad de género e inteligencia emocional. Su desempeño es evaluado periódicamente, con la intención de determinar si en los módulos a su cargo, se utilizan efectivamente el enfoque por competencias y las políticas institucionales en materias de no discriminación, justicia democrática, entre otros.

a) Diagnóstico de necesidades formativas

Para desarrollar sus programas de amplio espectro, la Escuela Judicial lleva a cabo diagnósticos de necesidades de formación donde participan diversos actores, tales como los y las integrantes de la Suprema Corte, los jueces y las juezas, así como los y las representantes de los sectores del litigio privado, la academia y las personas usuarias de los servicios judiciales.

Tales diagnósticos parten del análisis de las actuaciones judiciales y sus problemas más frecuentes, de los estudios de opinión acerca de la calidad de la justicia, de las opiniones de especialistas y actores del sistema acerca de las principales debilidades que se observan en la función jurisdiccional. Se analizan, asimismo, las experiencias exitosas en otras latitudes en el campo de la formación judicial.

Con la información recabada, se determinan cuáles son las principales áreas de acción de la Escuela Judicial para la atención de los problemas encontrados y se elabora un macrodiseño.

b) Macrodiseño por competencias

La información arrojada por el diagnóstico permite determinar un “mapa funcional” del cargo, el cual nos ilustrará con claridad en qué consiste, concretamente, la función acerca de la que se pretende formar. El mapa permite determinar cuáles son las grandes áreas de desempeño del juez o de la jueza, así como las unidades y elementos de competencia que requerirá para llevar adelante dicha función en forma eficaz. De ahí se pueden determinar cuáles conocimientos (saberes), destrezas y habilidades (saberes hacer), valores y actitudes (saberes ser) debe tener la persona juzgadora para desarrollar su función con calidad y en apego al Estado de derecho.

Esta información conduce a la determinación de las competencias que en forma prioritaria deberán ser desarrolladas, lo que permite determinar los grandes objetivos que la formación tendrá, así como las áreas temáticas en las que se centrará. Esta malla curricular deberá reflejar una alta dosis de integración entre sus diferentes componentes; las competencias se superponen, pues no son sino rutas que conducen a un objetivo común: la excelencia en la Administración de Justicia.

c) Microdiseño por competencias

Una vez que la Escuela Judicial haya determinado los objetivos esenciales del proceso formativo, se basa en dicha información para diseñar los diferentes módulos o talleres que conformarán sus programas. De los objetivos se derivarán los contenidos temáticos a tratar, las estrategias metodológicas a ser empleadas, los recursos escritos, audiovisuales y tecnológicos que se emplearán, las formas de evaluación y, finalmente, las evidencias de desempeño que permitan demostrar la efectividad del proceso formativo.

Se da énfasis al trabajo colaborativo, a la propia construcción de los conocimientos, al empleo del método de casos y del método clínico, al saber interdisciplinario y a la visión de una justicia comprometida con la democracia. Las tecnologías de la información y la comunicación son esenciales para el logro de esta meta, pues permiten formas novedosas y originales de trabajo colaborativo, por medio de recursos tales como los foros virtuales, las videoconferencias y los *wikis*, entre otros.

d) Evaluación del impacto de la formación

Finalmente, se analiza el impacto real que la formación ha tenido en el desarrollo de las competencias pretendidas. Las evidencias de desempeño finales deben demostrar si el proceso formativo ha cumplido su función en el campo del saber, del saber hacer y del saber ser. Con la información recabada, se toman decisiones para el mejoramiento de los procesos formativos. Estos datos, a su vez, pueden ser de gran utilidad para la toma de decisiones en el campo de la política judicial y legislativa.

En síntesis, una formación exitosa es solamente aquella que redunde en un cambio cualitativo en la Administración de Justicia que acerque dicha función de su papel principal como garante de los derechos de las personas; en otras palabras, una justicia más eficaz y legítima.

Conclusión

Si bien la incorporación de un enfoque por competencias en los procesos de formación y capacitación judiciales genera grandes responsabilidades para las Escuelas Judiciales (es mucho más sencillo seguir formando al estilo tradicional), ciertamente potencia las posibilidades reales de impactar, a través de la formación, en la calidad de la Administración de Justicia.

Un servicio público de mayor calidad, más humano y comprometido con el modelo democrático, incrementa la legitimidad del sistema, al tiempo que propicia un más efectivo clima de control y rendición de cuentas. No busca eliminar las opiniones negativas acerca de la actuación de los tribunales en la opinión pública y los medios de prensa, pues estas son generadas por una pluralidad de factores; pero pretende disminuir sustancialmente los casos en que tales opiniones obedecen a faltas reales o errores concretos de parte de las juezas y los jueces.

La justicia no debe ser nunca más un reducto inalcanzable para el promedio de los ciudadanos y las ciudadanas, una cápsula cerrada inmune a la crítica y a la opinión. La formación que la Escuela Judicial lleva a cabo puede favorecer decididamente a que este objetivo sea una realidad y que se fortalezca así la legitimidad de una de las instituciones más importantes para el sostenimiento del modelo asociativo democrático que debe orientar la actuación de los Est